

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 12 de agosto de 2024.

C. SOLICITANTE DE FOLIO 250483400010924

Presente.-

En atención a su solicitud de información identificada con el número de folio 250483400010924, solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, y turnada a esta Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, en la cual solicita textualmente lo siguiente:

"1.- En los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 Informar cuantas investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa realizo la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas contra los funcionarios y autoridades de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa hoy Universidad Autónoma Indígena de México para cumplir con las solicitudes realizadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) dentro de la Auditoría Forense: 2016-4-99494-12-0003-DN-2018.

2.- Informar en que estado procesal se encuentran dichas investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa que referimos en el punto numero 1 de la presente solicitud, así como también informar el nombre las áreas y los funcionarios contra los que se entablaron dichos procedimientos." (Sic)

Le comento que La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé que el acceso a la información pública es un derecho humano que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

Que en cumplimiento a los artículos 21, 22, fracción XII, 23 y 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Unidad de Transparencia turnó para su atención la solicitud de información a la Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad de este ente gubernamental para que se pronunciaran al respecto.

Por lo anterior, a través de los oficios STRC-SRN-DQDI-1754/2024 emitido por la Titular de la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones, Licenciada Susana Elizabeth Gastélum Armenta y oficio STRC-SRN-DRA-184/2024 signado por la Licenciada Nelly Karen Ortiz Álvarez, Directora de Responsabilidades Administrativas, unidades administrativas adscritas a la Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, informan lo siguiente:

Primero: Se le informa que derivado de una búsqueda exhaustiva, diligente y razonable en los registros y archivos generados como parte de las atribuciones establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, a la fecha de presentación de la solicitud de información, **se localizó la existencia de una investigación, el cual se encuentra en trámite.**

Segundo: Respecto a la información requerida consistente en “...**informar el nombre las áreas y los funcionarios contra los que se entablaron dichos procedimientos...**”, se informa que la información se clasifico como reservada. Por lo anterior, se adjunta copia de la resolución 9-1EXT/CT-STRC/2024 emitido por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas en el que se confirma la clasificación de información como reservada por un lapso de dos años. Lo anterior, con la finalidad de evitar que se obstruyan los procedimientos para fincar responsabilidades administrativas a los(as) servidores(as) públicos(as) en tanto no se haya dictado la resolución administrativa

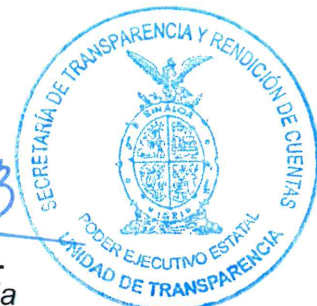
Se comunica lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 8, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 133, 136, 141 y 162 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



LIC. DANIELA HERNÁNDEZ SANDOVAL
Responsable de la Unidad de Transparencia





TRANSPARENCIA

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad Dirección de Responsabilidades Administrativas

Oficio: STRC-SRN-DRA-184/2024

Asunto: El que se indica

Culiacán, Sinaloa, a 16 de julio de 2024.

**Responsable de la Unidad de Transparencia de la
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.**
P r e s e n t e.

Hago referencia a su oficio número **STRC-UT-188/2024** de quince de julio de dos mil veinticuatro, mediante el cual remite para su atención la solicitud de información con número de folio 250483400010924 presentada a través del sistema INFOMEX SINALOA/PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, solicitud que textualmente dice:

"... 1.- En los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 Informar cuantas investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa realizo la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas contra los funcionarios y autoridades de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa hoy Universidad Autónoma Indígena de México para cumplir con las solicitudes realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dentro de la Auditoría Forense: 2016-4-99494-12-0003-DN-2018.

2.- Informar en que estado procesal se encuentran dichas investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa que referimos en el punto número 1 de la presente solicitud, así como también informar el nombre las áreas y los funcionarios contra los que se entablaron dichos procedimientos. ..." (Sic)

La solicitud fue remitida para su atención a esta Dirección como responsable de la substanciación de procedimientos de responsabilidades administrativas de conformidad con lo establecido por el artículo 18 fracciones I, II, XIV del Reglamento Interior de esta Secretaría; por tal razón se brinda respuesta en los términos siguientes:

De una búsqueda exhaustiva, diligente y razonable en los registros y archivos de esta Autoridad, le informo que en los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 no se encontraron Procedimientos de Responsabilidad Administrativa contra funcionarios y autoridades de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, hoy Universidad Autónoma Indígena de México para cumplir con las solicitudes realizadas por la Auditoría Superior de la Federación dentro de la auditoría Forense 2016-4-99494-12-0003-DN-2018.

Sin otro asunto en particular me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Licenciada Nelly Karen Ortiz Álvarez

Directora de Responsabilidades Administrativas de la
Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad de la
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.



C.c.p. Archivo. Elaboró EHG Revisó: NKO





Culiacán Rosales, Sinaloa; Resolución del Comité de Transparencia de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, en su novena sesión extraordinaria de 2024, celebrada el día ocho de agosto del año dos mil veinticuatro.

Visto para resolver el procedimiento 9-1EXT/CT-STRC/2024, del índice del Comité de Transparencia, relativa a la reserva de información solicitada por la Titular de la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones, unidad administrativa adscrita a la Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, este Comité de Transparencia, emite los siguientes:

RESULTANDOS

1. Solicitud de acceso a la información pública.

Mediante la solicitud de acceso a la información pública identificada con el número de folio 250483400010924, solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el solicitante requirió lo siguiente:

“1.- En los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 Informar cuantas investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa realizo la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas contra los funcionarios y autoridades de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa hoy Universidad Autónoma Indígena de México para cumplir con las solicitudes realizadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) dentro de la Auditoría Forense: 2016-4-99494-12-0003-DN-2018.

2.- Informar en que estado procesal se encuentran dichas investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa que referimos en el punto numero 1 de la presente solicitud, así como también informar el nombre las áreas y los funcionarios contra los que se entablaron dichos procedimientos.” (Sic)



2. Turno de solicitud a la unidad administrativa competente.

Con fundamento en el artículo 68, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 16, fracciones XII, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Unidad de Transparencia, turnó la solicitud materia de la presente resolución, por medio del oficio STRC-UT-188/2024, de fecha quince de julio del dos mil veinticuatro, a la Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, a efecto de que, se pronunciara al respecto.

3. Solicitud de confirmación de clasificación de información como reservada.

Mediante el oficio STRC-SRN-DQDI-1754/2024 emitido por la Lic. Susana Elizabeth Gastélum Armenta, Directora de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Subsecretaría Responsabilidades y Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, informa que de la búsqueda realizada a la base de datos se identificó la existencia de una investigación derivada de la auditoria forense 2016-4-9949-12-0003-DN-2018, la cual se encuentra en trámite. En cuanto a la información solicitada consistente en “... *el nombre, las áreas y los funcionarios contra los que se entablaron dichos procedimientos...*” solicita a este Comité de Transparencia reservar la información, toda vez que la divulgación de información representa un riesgo de obstruirse la conducción del procedimiento administrativo que se encuentra en su etapa de investigación.

4. Remisión del expediente al Comité de Transparencia

Recibido el oficio citado en el resultado que antecede, la Secretaría Técnica de este órgano de transparencia lo integró al expediente en que se actúa, de lo cual corrió traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los elementos necesarios para el pronunciamiento de la presente resolución.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia

Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con los artículos 6°, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 66, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

SEGUNDO. Análisis de la solicitud que clasifica la información como reservada.

Analizados los argumentos efectuados por la Titular de la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, los cuales expone a través del oficio STRC-SRN-DQDI-1754/2024, este Comité considera acertada la determinación realizada en el sentido de clasificar información como reservada relacionada con la investigación derivada de la auditoría forense 2016-4-9949-12-0003-DN-2018, la cual se encuentra en trámite, en razón de las consideraciones siguientes:

“(…)

La Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones tiene la atribución de realizar las investigaciones por presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales y particulares por conductas sancionables, por lo que actúa en calidad de “Autoridad Investigadora” de conformidad con las disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y el Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, el veintisiete de enero de dos mil veinticuatro.



Al respecto, si bien es cierto que la información gubernamental es, por regla general, pública y se rige por el principio de máxima publicidad, es también cierto que el derecho de los ciudadanos a recibir la información, en un tiempo y lugar determinados, no puede llegar a considerarse como absoluta, es decir, deben ser matizadas por las circunstancias por las cuales puede ser limitado ese derecho, caso por caso.

(...)

De modo que, cuando la información pueda estar completamente integrada en el expediente de investigación, y no exista posibilidad de que le o los presuntos responsables puedan valerse del conocimiento previo de cuáles podrían ser las siguientes diligencias de investigación a realizar, a partir de la información publicitada previamente sin el debido cuidado, se podrá poner a disposición de cualquier interesado para que pueda ser consultada, de manera que su derecho al acceso a la información no se limita en forma absoluta, sino relativamente por estar condicionada al periodo necesario de su reserva, hasta en tanto la resolución administrativa pueda quedar firme.

Si por alguna razón, el entregar anticipadamente información gubernamental ocasionara una afectación a la buena conducción de las investigaciones, así como a la correcta determinación de responsabilidades administrativas, se habría antepuesto el interés particular de los solicitantes de la información al del interés general en que se lleven a cabo adecuadas investigaciones que permitan detectar y sancionar faltas administrativas y/o hechos de corrupción.

(...)”

Por lo previo, se solicita la reserva de información consistente en nombre, las áreas y los funcionarios contra los que se entablaron procedimientos de responsabilidades administrativas para cumplir con las solicitudes realizadas por la Auditoría Superior de la Federación dentro de la Auditoría Forense 2016-4-99494-12-0003-DN-2018, toda vez que la divulgación de información representa un riesgo de obstruirse la conducción del procedimiento administrativo que se encuentra en su etapa de investigación.



Lo anterior, de conformidad con el artículo 113, fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en relación con el numeral 162, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el lineamiento Vigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas.

En ese tenor, y en virtud de que la información solicitada se clasifica como reservada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso a la a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se procedió a realizar la prueba de daño prevista en el numeral citado. Se adjunta a la presente resolución copia del oficio STRC-SRN-DQDI-1754/2024.

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia

Para confirmar, modificar o revocar la clasificación de información presentada por titular de la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones, unidad administrativa adscrita a la Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, en principio, se tiene presente que en el esquema de nuestro sistema constitucional, en relación con la clasificación de la información realizada por la unidad administrativa citada, es necesario destacar que el artículo 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece para los sujetos obligados de cualquier orden de gobierno, la obligación de garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información bajo su resguardo. No obstante, **el derecho de acceso a la información tiene como excepciones la información reservada y la información confidencial.** De esta forma, la reserva de información atiende al interés público, en tanto que la información confidencial se refiere a la protección de la vida privada y los datos personales.

Marco jurídico nacional aplicable en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas:



TRANSPARENCIA

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA
08 DE AGOSTO DE 2024

EXPEDIENTE NÚMERO: 9-1EXT/CT-STRC/2024
RESERVA DE INFORMACIÓN.

“Artículo 6, Apartado A, fracción II y artículo 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

(...)

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

*I. **Toda la información** en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, **es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.** Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*

*II. **La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijan las leyes.***

(...)

Dicho precepto indica que, el Estado y sus instituciones deberán regirse bajo los principios de máxima publicidad y disponibilidad de información; garantizando en todo momento el derecho de acceso a la información de manera amplia; y, si bien es cierto, el Estado debe garantizar el mismo, también lo es que hay cierta información de “interés público” que debe y puede ser reservada, es decir, este derecho implica una obligación positiva a cargo del Estado; sin embargo, esto no significa que el mismo y sus instituciones deban difundir toda la información que poseen. **Advirtiéndose que los límites del Derecho de Acceso a la Información, son necesarios en una sociedad democrática y este derecho no es absoluto, es decir, tiene limitantes, restricciones y excepciones, que deberán atender a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en aras de la protección de otros derechos.**

En cuanto al marco normativo aplicable a la información reservada, cabe hacer alusión al marco constitucional referente a esta excepción al derecho de acceso a la información; concretamente lo previsto en el artículo 6, Apartado A, fracción I, de la Carta Magna, en los que se encuentra establecido que la información en posesión de los sujetos obligados es pública, y sólo puede ser reservada por razones de interés público y seguridad nacional. Dicho interés, se traduce en todas las causales previstas en el artículo 113, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se encuentran en armonía con las establecidas en el numeral 162, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y tratados internacionales aplicables al caso que nos ocupa.

En este sentido, y en estricto apego a la normatividad en materia de Transparencia, el artículo 152, párrafo segundo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que en la clasificación de la información se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir, que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, debiendo además en todo momento, aplicar una prueba de daño.

Por otra parte, el artículo 163 de la misma norma, establece que los límites de acceso a la información o las causas que devienen para justificar la reserva de información, deben estar fundadas y motivadas de igual manera, a través de la aplicación de la prueba de daño, en la cual, de conformidad con el artículo 153 de la misma ley, se debe atender lo siguiente:

- I. Que la divulgación de la información represente un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público;*
- II. Que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y,*
- III. Que la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.*



TRANSPARENCIA

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA
08 DE AGOSTO DE 2024

EXPEDIENTE NÚMERO: 9-1EXT/CT-STRC/2024
RESERVA DE INFORMACIÓN.

En este orden de ideas, el artículo 162 de la Ley de Transparencia local, especifica que podrá clasificarse como información reservada, entre otros, aquella que pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; afecte los derechos del debido proceso; aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado.

Por lo que, en el caso que nos ocupa, es importante mencionar que la información que se solicita, tales como *“el nombre, las áreas y los funcionarios contra los que se entablaron procedimientos de responsabilidades administrativas para cumplir con las solicitudes realizadas por la Auditoría Superior de la Federación dentro de la Auditoría Forense 2016-4-99494-12-0003-DN-2018”*, forma parte de una investigación, la cual se encuentra en trámite. Por lo tanto, se considera que con la divulgación de la información solicitada puede ocasionarse un perjuicio al interés público, toda vez que la sociedad tiene el interés de que las faltas administrativas cometidas por los servidores públicos sean sancionadas, máxime si con dichas conductas se generó un daño o menoscabo al patrimonio del Estado, lo cual es el fin último de la naturaleza de esta materia.

De conformidad con lo hasta aquí expuesto, este Comité de Transparencia, con fundamento en los artículos 66, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y tomando en consideración los fundamentos y motivos propuestos mediante el oficio STRC-SRN-DRA-1754/2024, emitido por la Directora de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad de este ente gubernamental, se concluye que lo procedente es **confirmar por unanimidad** la reserva parcial de la información contenida en el expediente de investigación generado para



atender la promoción de responsabilidad administrativa notificada por la Auditoría Superior de la Federación, derivada de la auditoría forense 2016-4-9949-12-0003-DN-2018, la cual contiene parte de los datos que se requieren para atender la petición de información identificada con el número de folio 250483400010924, en razón de las consideraciones anteriormente expuestas, por lo cual la restricción del derecho de acceso a la información se encuentra legalmente justificada.

Lo anterior, en términos de los artículos 155, fracción I, 113, fracción IX de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en correlación con el artículo 162, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

CUARTO: Resolución del Comité de Transparencia.

En las relatadas consideraciones, este Comité de Transparencia con fundamento en los artículos 66, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y tomando en consideración los argumentos expuestos por la Titular de la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, se corrobora que los datos referente a nombre de las áreas y los funcionarios contra los que se entablaron el procedimiento de investigación, deberá permanecer reservado por un periodo de dos años, con la finalidad de evitar que se obstruyan los procedimientos para fincar responsabilidad administrativa a los(as) servidores(as) públicos(as) en tanto no se haya dictado la resolución administrativa.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente procedimiento, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de la presente resolución.

SEGUNDO. Se **CONFIRMA** la clasificación de información como reservada realizada por la Titular de la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Subsecretaría Responsabilidades y Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, respecto "*los datos referente a nombre de las áreas y los funcionarios contra los que se entablaron el procedimiento de investigación*", por un periodo de dos años, por tanto, se **NIEGA** parcialmente el acceso a la información solicitada objeto de la solicitud de folio 250483400010924, según lo precisado en los puntos de Consideraciones y Fundamentos de esta resolución.

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al solicitante a través de la Unidad de Transparencia y a la Titular de la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Subsecretaría Responsabilidades y Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, para los efectos conducentes.

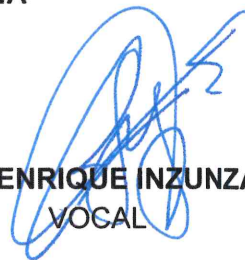
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, mediante sesión extraordinaria de fecha ocho de agosto de dos mil veinticuatro.



LIC. MAYRA GISELA PEÑUELAS ACUÑA
PRESIDENTA



LIC. MICHELLE CEBREROS ONTIVEROS
SECRETARIA TÉCNICA SUPLENTE



ING. JORGE ENRIQUE INZUNZA OSUNA
VOCAL

Asunto: Respuesta para solicitud de acceso a información pública.

Culiacán, Sinaloa, a 16 de julio de 2024.

Subsecretaría de Transparencia y Contraloría Social y
Presidenta del Comité de Transparencia de la
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
P r e s e n t e.

Hago referencia al oficio STRC-UT-188/2024, recibido en esta Dirección el quince de julio de dos mil veinticuatro, suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia de esta Secretaría, licenciada Daniela Hernández Sandoval, mediante el cual remite para su atención la solicitud de acceso a la información pública identificada con folio 250483400010924 presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, solicitud que textualmente dice:

"1.- En los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 Informar cuantas investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa realizo la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas contra los funcionarios y autoridades de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, hoy Universidad Autónoma Indígena de México para cumplir con las solicitudes realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dentro de la Auditoría Forense: 2016-4-9949-12-0003-DN-2018.

2.- Informar en que estado procesal se encuentran dichas investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa que referimos en el punto numero 1 de la presente solicitud, así como también informar el nombre las áreas y los funcionarios contra los que se enablaron dichos procedimientos" (Sic)¹

Dicha solicitud fue remitida para su atención a esta Dirección, como responsable de la investigación de quejas y denuncias, de conformidad con lo establecido por los artículos 15 fracciones I, XI y XXI y 17 fracciones I, II y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas; por lo que luego de la

¹ Sic: Del lat. *Sic* 'así'. Adverbio usado en impresos y manuscritos españoles, por lo general entre paréntesis, para dar a entender que una palabra o frase empleada en ellos, y que pudiera parecer inexacta, es textual (consultable en: <https://dle.rae.es/sic>)



búsqueda exhaustiva, diligente y razonable en los archivos que se generan como consecuencia del ejercicio de dicha atribución y como resultado de la misma, por medio del presente me permito informar lo siguiente:

Respuesta: Para atender la promoción de responsabilidad administrativa notificada por la Auditoría Superior de la Federación, derivada de la auditoría forense 2016-4-9949-12-0003-DN-2018, existe una investigación, la cual se encuentra en trámite.

En cuanto a la información solicitada consistente en *“... el nombre las áreas y los funcionarios contra los que se entablaron dichos procedimientos”*, me permito señalar que la información se clasifica como reservada, en atención de las siguientes consideraciones:

La Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones tiene la atribución de realizar las investigaciones por presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales y particulares por conductas sancionables, por lo que actúa en calidad de “Autoridad Investigadora” de conformidad con las disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa² y el Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, el veintisiete de enero de dos mil veintiuno.

² **Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.**

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

...
II.- Autoridad investigadora: La autoridad en la Secretaría, los Órganos internos de Control, la Auditoría Superior del Estado, encargadas de la investigación de Faltas administrativas;

Al respecto, si bien es cierto que la información gubernamental es, por regla general, pública y se rige por el principio de máxima publicidad, es también cierto que el derecho de los ciudadanos a recibir la información, en un tiempo y lugar determinados, no puede llegar a considerarse como absoluta, es decir, deben ser matizadas las circunstancias por las cuales puede ser limitado ese derecho, caso por caso. Esclarecer qué servidor o servidores públicos deben ser responsabilizados por tales hechos, implica llevar a cabo las investigaciones con un grado razonable de secrecía, ya que de lo contrario, la publicidad de la información podría dar lugar a que el presunto o presuntos responsables traten o pretendan ocultar evidencias u obstaculizar la identificación de evidencias con la concreta finalidad de evadir su presunta responsabilidad, o desvanecer evidencias que, al ser destruida o inutilizada, pudiera impedir el acreditamiento del algún hecho dañoso.

Es necesario resaltar que el derecho de Acceso a la Información Pública se encuentra consagrado en el artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el cual todo acto de autoridad (o acto de Gobierno) es de interés general y por ende es susceptible de ser conocido por todos, sin embargo, como lo ha interpretado el Pleno del Alto Tribunal, el derecho a la información no puede caracterizarse como de contenido absoluto, sino que su ejercicio está acotado en función de ciertas causas relevantes; así se obtiene que la información que tienen bajo su resguardo los sujetos obligados del Estado, encuentra como excepción aquella que sea temporalmente reservada o confidencial, cuando de su propagación pueda derivarse perjuicio por causa de interés público y seguridad nacional.

Sirva de sustento la siguiente tesis³:

³ Emitida por el pleno, visible en el Semanario de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril 2000, página 74, Tesis P. LX/2000, Materia (s): Constitucional. (Registro digital: 191967)

“DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.

El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.”

De modo que, cuando la información pueda estar completamente integrada en el expediente de investigación, y no exista posibilidad de que el o los presuntos responsables puedan valerse del conocimiento previo de cuáles podrían ser las siguientes diligencias de investigación a realizar, a partir de la información publicitada previamente sin el debido cuidado, se podrá poner a disposición de cualquier interesado para que pueda ser consultada, de manera que su derecho al acceso a la información no se limita en forma absoluta, sino relativamente por estar condicionada al periodo necesario de su reserva, hasta en tanto la resolución administrativa pueda quedar firme.

Si por alguna razón, el entregar anticipadamente información gubernamental ocasionara una afectación a la buena conducción de las investigaciones, así como a

la correcta determinación de responsabilidades administrativas, se habría antepuesto el interés particular de los solicitantes de la información al del interés general en que se lleven a cabo adecuadas investigaciones que permitan detectar y sancionar faltas administrativas y/o hechos de corrupción.

Por consecuencia, por lo que hace a la información consistente en: “...*el nombre las áreas y los funcionarios contra los que se entablaron dichos procedimientos*”, es necesario por el momento **RESERVAR** la información solicitada toda vez que la divulgación de información representa un riesgo de obstruirse la conducción del procedimiento administrativo que se encuentra en su etapa de investigación.

Lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, en relación con el numeral 162, fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el lineamiento Vigésimo Octavo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la Información, así como la elaboración de versiones públicas, mismos que establecen:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

“Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...

IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;

...”

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa

“Artículo 162. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...

VIII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;

...”

Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas

“Vigésimo octavo. De conformidad con el artículo 113, fracción IX de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa correspondiente; para lo cual, se deberán acreditar los siguientes supuestos:

- I. La existencia de un procedimiento de responsabilidad administrativa en trámite;*
- II. Que la información se refiera a actuaciones, diligencias y constancias propias del procedimiento de responsabilidad; y*
- III. Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir o menoscabar la actuación de las autoridades administrativas que impida u obstaculice su determinación en el procedimiento de responsabilidad.”*

En ese tenor, y en virtud de que la información solicitada se clasifica como reservada, de conformidad a lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se procede a la aplicación de la prueba de daño prevista en el citado numeral, el cual dispone lo siguiente:

“Artículo 153. *En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:*

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público;*
- II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda; y,*
- III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.”*

En ese sentido, en relación a lo dispuesto en la fracción I, del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que

señala: ***“La divulgación de la información solicitada representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público;”*** es dable resaltar que la información que se solicita, consistente en *“el nombre las áreas y los funcionarios contra los que se entablaron dichos procedimientos”* forma parte de un expediente administrativo seguido en forma de juicio, mismo que actualmente se encuentra en la etapa de investigación motivo por el cual la publicidad de la información solicitada podría dar lugar a que el sujeto o sujetos de investigación traten o pretendan ocultar evidencias u obstaculizar la identificación de evidencias con la concreta finalidad de evadir su presunta responsabilidad, o desvanecer evidencias que, al ser destruidas o inutilizadas, pudieran impedir el acreditamiento del hecho dañoso o alterar el procedimiento en cuestión, evitando con ello ser sancionados, trastocándose la finalidad principal del procedimiento administrativo sancionador y por ende al interés público.

Es importante mencionar que el derecho administrativo sancionador al igual que el derecho penal forman parte del *ius puniendi* del Estado, es decir, constituyen la manifestación de la potestad punitiva del Estado, en el caso del derecho administrativo sancionador busca garantizar a la sociedad, el desarrollo correcto de las funciones de los servidores públicos que se encuentran reguladas por leyes administrativas, lo cual realiza aplicando la facultad del Estado para imponer sanciones. Sirve de criterio orientador la tesis aislada⁴ de título y contenido siguiente:

“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.

⁴ Emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Constitucional, Administrativa, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de 2006, página 1565, tesis P./J. 99/2006, Registro digital 174488.

De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados. En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo administrativo sancionador -apoyado en el Derecho Público Estatal y asimiladas algunas de las garantías del derecho penal- irá formando los principios sancionadores propios para este campo de la potestad punitiva del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal.”

Por lo que la reserva de la información en el procedimiento administrativo pretende salvaguardar las investigaciones para evitar la divulgación de datos o elementos que pudieran poner en riesgo la misma, así como garantizar el debido proceso de los intervinientes en el procedimiento sancionador, por lo que la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio al interés público.

Seguidamente, en relación a lo dispuesto en la fracción II, del artículo 153 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que señala: ***“El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda;”*** se colige que en caso de que se proporcionara la información solicitada, se estaría produciendo una afectación al interés jurídico tutelado por esta autoridad, ya que dicha información se encuentra condicionada al establecimiento de líneas de investigación, las cuales al ser divulgadas, podrían

ocasionar una interferencia del solicitante en la investigación, lo que a su vez podría modificar el rumbo de las actuaciones de la autoridad, de manera que se debe mitigar el riesgo de que intereses ajenos a la estricta legalidad puedan interferir con el principio de no intromisión de quienes hasta este momento no han tenido intervención en la investigación.

En ese tenor, este sujeto obligado considera que con la divulgación de la información solicitada puede ocasionarse un perjuicio al interés público, toda vez que la sociedad tiene el interés de que las faltas administrativas cometidas por los servidores públicos sean sancionadas, máxime si con dichas conductas se generó un daño o menoscabo al patrimonio del Estado, lo cual es el fin último de la naturaleza de esta materia.

Por último, en lo relativo al supuesto previsto en la fracción III del artículo 153 de la ley referida, el cual señala: ***“La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.”***

Tenemos que por una parte el artículo 177 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública define como proporcionalidad al equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población, por tal motivo es de hacer notar que si bien existe una afectación al derecho fundamental del solicitante, puesto que no podrá tener acceso, temporalmente, a la información; es igualmente cierto que tal medida resulta proporcional con el fin que se busca, que como se ha expuesto, es evitar o minimizar el riesgo de la obstrucción de la investigación en el procedimiento administrativo.

En razón de lo anteriormente expuesto y en atención a lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa

por medio del presente solicitó al Comité de Transparencia de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, se confirme la clasificación de la información como reservada por un periodo de dos años, en atención a lo señalado por el numeral 66, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

Sin otro asunto en particular me es grato enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e.



**Licenciada Susana Elizabeth Gastélum Armenta.
Directora de Quejas, Denuncias e Investigaciones
de la Subsecretaría de Responsabilidades y
Normatividad de la Secretaría de Transparencia y
Rendición de Cuentas.**

C.c.p. **Maestro Abelardo Beltrán León.** Subsecretario de Responsabilidades y Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

C.c.p. Archivo.

Elaboró y revisó: Licenciada Susana Elizabeth Gastélum Armenta.